



AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ SOCIAL

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,
SALA CIVIL DE DECISIÓN.**

Medellín, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.

Proceso: Verbal (Responsabilidad Civil Médica)

Demandante: Yuliana Morales Mejía y otros.

Demandados: CLINICA DEL PRADO

C.U.D.R.: 05001 31 03 014 **2019 00201-01**

Rdo. Interno: 022-21

AIV: 080/21

ASUNTO: No repone auto que declara desierto recurso de apelación.

Se decide el recurso de reposición promovido por el apoderado de la parte demandante, contra el auto que declaró desierto el recurso de apelación por él interpuesto, en contra de la sentencia proferida por el JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, el 10 de marzo de 2021, por no haberse sustentado en la oportunidad legalmente contemplada para tal efecto, en los siguientes términos:

1.0. ANTECEDENTES.

Por auto del 11 de mayo de los corrientes, se admitió la apelación formulada en contra de la sentencia antes referenciada, incoada por el vocero judicial de la parte demandante, disponiéndose dar aplicación a los artículos 9° y 14 del decreto 806 de 2020, esto es, se concedió al recurrente el término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de la misma, para sustentar el recurso, el cual venció el 26 de mayo de 2021, en silencio, acorde con la constancia secretarial del 15 de junio del año en curso, razón por la cual se procedió a declarar desierto el recurso en auto del tres de septiembre de los corrientes.

Dentro del término de ejecutoria de este último proveído, el togado que asiste los intereses de la parte demandante, solicitó que fuera revisada la decisión adoptada en el mismo, exponiendo:

“Alegando de manera errónea por parte de su honorable magistratura un incumplimiento de una carga procesal, que daba como consecuencia declarar desierto el recurso, pero como ya lo hemos mencionado el recurso de apelación fue debidamente justificado en primera instancia por la parte demandante, razón por la cual no se cumple con dicho procedimiento, puesto que el recurso de apelación fue oportunamente sustentado en primera instancia ante el despacho encargado de emitir la sentencia, reparos que fueron planteados de manera extensa por varios minutos de intervención del presente apoderado judicial...”

Dijo que el Decreto 806 de 2020, tiene como principal medida la de simplificar los procesos y ritualidades dentro del trámite, razón por la cual, estima desproporcionado declarar desierto un recurso que fue debidamente sustentado y en un nuevo sistema procesal darle un efecto jurídico que atenta contra la administración de justicia, acceso a la doble instancia, si efectivamente fueron sustentados los reparos de la decisión.

De dicho recurso se dio traslado a la parte demandada en los términos del artículo 110 del Código General del Proceso.

El apoderado de la Clínica del Prado S.A.S., manifestó que no es correcta aquella impresión del recurrente según la cual la carga que impone la sustentación del recurso de apelación ante el juez de segunda instancia es desproporcionada o atenta contra los derechos fundamentales, pues la Corte Constitucional ha interpretado lo contrario.

Expresó que el argumento suministrado por el apoderado de la parte actora no es de orden constitucional, sino que busca imponer su propia visión de las normas que regulan el trámite de la apelación de la segunda instancia, cuestión, por lo demás, de la que se ha ocupado de manera amplia y detallada el auto impugnado. Adujo que allí se explica que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 28 de julio de 2021, unificó la posición respecto del trámite de apelación y del momento procesal en el cual el recurrente debía sustentar la apelación promovida en contra de la sentencia, posición según la cual se hacen necesarios dos aspectos fundamentales en una apelación: (i) los reparos concretos, en primera instancia y (ii) la sustentación, que se debe dar en la segunda instancia frente al superior encargado de dicho recurso.

Por su parte del abogado de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., arguyó que no basta señalar los reparos concretos al momento de la interposición del recurso, sino que es requisito propio de la pretensión impugnativa, sustentar el recurso en segunda instancia, de lo contrario, la consecuencia jurídica prevista en la norma procesal es la declaratoria de desierta de dicho recurso, como bien lo sostuvo la Sala Unitaria de Decisión.

Advirtió que esta situación fue resulta en apelación por la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, quien señaló mediante providencia STL11496-2021, lo siguiente:

“De cara a los razonamientos del Tribunal, es menester señalar que esta Sala difiere del criterio expuesto en primera instancia constitucional, según el cual la sustentación del recurso en segunda instancia constituye un «exceso rigorismo jurídico», pues si bien

esta Corporación en oportunidad anterior encontraba que tal exigencia violaba el debido proceso, lo cierto es que de conformidad con la sentencia CC SU418-2019, esta colegiatura modificó su criterio, tal como se indicó en la sentencia CSJ STL2791-2021.

En efecto, esta Sala ya se pronunció al respecto, esto es, en la sentencia CSJ STL73172021, en la que se dijo:

(...)

Adviértase como el fallador convocado empezó por indicar que el Decreto 806 de 2020 impone a la parte recurrente el deber de sustentar el recurso de apelación ante el juzgador de segundo grado, una vez ejecutoriado el auto que admitió la alzada. La omisión de dicha carga conlleva a la declaratoria de desierto, normativa que «guarda relación con el precepto 322 del CGP, eso sí, estructurándose ahora un trámite escritural en el evento de no ser necesario el decreto de pruebas en segundo nivel».

A continuación, el Colegiado enjuiciado sostuvo que «si bien existió una alusión a los reparos concretos cuando el asunto aún se hallaba en la sede inicial, proclamados a su turno en contra de la decisión replicada, no es admisible equiparar sus efectos a la sustentación obligatoria en segunda instancia».

Lo anterior, comoquiera que, para el juez de apelaciones, el legislador no solo impuso al apelante el deber de «edificar en primera sede la pretensión impugnativa», sino también la obligación de «argumentar y desarrollar en segundo grado esos reparos concretos que debieron formularse ante el a quo». Afirmó que sobre el particular, la homóloga Civil se pronunció en sentencia CSJ STC10405-2017.”

2.0. CONSIDERACIONES.

Contempla el artículo 318 del Código General del Proceso, que quien pretenda controvertir determinada decisión, ante el mismo funcionario que la dictó, ya sea para que éste la revoque o reforme y en su lugar profiera otra distinta, podrá interponer ***recurso de reposición*** dentro de los tres días siguientes a la notificación de la decisión objeto de reparo o en el mismo momento en que la misma se adopte, si se hace en audiencia.

Igualmente, exige la citada preceptiva que, en el escrito contentivo del recurso, se expongan las razones que lo sustenten, o si se realiza en audiencia, deberán consignarse en la misma.

Es así, que el vocero judicial de la parte demandante, haciendo uso de dicho mecanismo de contradicción, dentro del término legalmente establecido, formuló recurso de reposición en contra del auto que declaró desierta la alzada promovida frente a la sentencia emitida en primera instancia.

Como sustento de inconformidad, expuso el citado profesional que era errónea la interpretación dada por este Despacho frente a la declaratoria de desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado, toda que la alzada había sido justificada en primera instancia, es decir, allí había realizado los reparos de manera extensa por varios minutos.

Frente a ello hay que significar que la providencia cuestionada verticalmente había sido proferida en vigencia del Decreto 806 de 2020, por tanto, el trámite fue el contemplado en los artículos 9 y 14 de dicha normatividad, para efecto de darle prevalencia a la utilización de medios virtuales y tecnológicos, en procura de mantener la celeridad del proceso y en aras de velar por la salud de usuarios de la justicia, jueces y magistrados, lo cual se indicó de manera expresa en el auto que admitió la apelación impetrada por la parte demandante.

Las citadas normas, hacen relación a la forma de notificación y trámite de la apelación, entre otras, en material civil, indicando:

“...Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalado en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes.

Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se

notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto...”

En ese sentido, de la norma se evidencia que la parte impugnante debía sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de su admisión, sin embargo, en este caso permaneció en silencio.

Sobre este tema, mediante sentencia SC3148-2021, emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 28 de julio de 2021, radicado 05360 31 10 002 2014 00403 02, M.P. ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO, se **unificó** la posición frente al momento procesal en el cual el recurrente debía sustentar la apelación promovida en contra de la sentencia, tal como se explicó en el auto atacado, que no es otro que **ante el Superior**, destacando que ello es viable tanto bajo el imperio del precepto 322 del Código General del Proceso, como bajo la vigencia del Decreto 806 de 2020.

Es que, frente a la sustentación, conforme viene de señalarse, era necesario realizarla en esta instancia, independientemente de que el trámite que se aplicara fuera el establecido en el Código General del Proceso, o en el Decreto 806 de 2020, pues en ambos eventos, no resulta admisible como tal el pronunciamiento que se realice ante el *a quo*. Lo único que varió, y se puso de presente en el auto pertinente, fue que ya no se celebraría audiencia en segunda instancia para sustentar la apelación, si no que ahora debe hacerse por escrito y a través de medios electrónicos.

Finalmente se acota que, entender que una “pre-sustentación” como algunos la denominan, que unos reparos ampliamente expuestos, equivalen a la sustentación misma ante el superior, desconoce la unificación mencionada, y, además, conduce a la inseguridad jurídica y a la incertidumbre, tornando lo que debía ser regla general en pura “casuística”, pues ahora será cada juez o magistrado quien defina, según su criterio, si esos reparos ampliamente expuestos equivalen a sustentación; sin dejar de

lado que también se ponen en entredicho los derechos de la contraparte, de quien no apeló, pues estará sujeto, primero, a la decisión del juez o magistrado *ad-quem* sobre si existe o no sustentación; y segundo, se le dificultará en grado sumo pronunciarse, pues no se sabe con certeza si habrá o no traslado del recurso, en tanto, inicialmente sólo se trataba de reparos y el traslado está previsto en el decreto 806 de 2020 para la sustentación como tal.

En consecuencia, no se repondrá el proveído que declaró desierto el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, el 10 de marzo de 2021.

Consecuente con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala de Decisión Civil,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el auto que declaró desierto del recurso de apelación contra la sentencia proferida por el JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, el 10 de marzo de 2021, al interior del proceso VERBAL (RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA) promovido por YULIANA MORALES MEJÍA, MAYCOL JOHNS LONDOÑO, MARIBEL MEJÍA, JOHN JAIRO LONDOÑO LOAIZA y MARDYN JOHANA LONDOÑO, en contra de la CLINICA DEL PRADO, a la cual fue llamada en garantía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

SEGUNDO: En consecuencia, devuélvase el expediente digital al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Magistrado,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a vertical stroke, likely representing the name Carlos Arturo Guerra Higueta.

CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

C.U.D.R. 05001 31 03 014 2019 00201-01